

Campeños, Solidaridad y ecología en Calakmul, Campeche

Martine Dauzier*

Entre los años 1991 y 1995 se produjo en México una coyuntura política que permitió una serie de experiencias de organización campesina con la influencia del Programa Nacional de Solidaridad. Para el estado de Campeche esta coyuntura culminó en la Reserva de la Biosfera de Calakmul y en la creación de una organización campesina, el Consejo Regional de Xpujil.¹ Durante esos años, esta región contó con un fuerte apoyo político federal y estatal, así como con una inversión modesta pero nunca antes vista en la zona y con varios equipos de asesores y técnicos de Solidaridad.

Desde sus inicios, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) fue criticado por su clientelismo político y electoral.² Por su parte el expresidente Carlos Salinas pensaba, en los últimos años, que uno de los logros más importantes de su administración fue precisamente Solidaridad. En un artículo³ fechado en abril de 1999 insistía en las bondades de este programa, pues en palabras suyas, "... estableció una estrategia social diferente, renovada. Su esencia estuvo en que los que menos tenían, organizaran sus propias fuerzas, por ellos mismos y para su propio beneficio". Salinas alaba Solidaridad como parte del esfuerzo para fortalecer la legitimidad social del Estado mediante la apertura de "... espacios a la participación popular organizada e independiente".

También, en la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, uno de los principales puntos, se refería a las cuestiones ambientales; la experiencia de Calakmul fue considerada con especial atención por la administración federal pues mostraba claramente, al extranjero, las preocupaciones ecológicas del gobierno mexicano.⁴

Razones éstas que nos indican que el estudio en los tiempos de Solidaridad, de esta zona, nos aportará elementos interesantes. Además se puede contrastar con el caso de otro estado no muy lejano, el de Chiapas. Es un claro ejemplo de cómo operó Solidaridad en uno de los principales conflictos del sureste mexicano que enfrentaba a campesinos con determinadas políticas ambientales.

El nombre de un pueblo en el extremo sur de la península de Yucatán, Xpujil, resonó en los discursos del presidente Salinas de Gortari en 1992 y 1993, en sus palabras de agradecimiento, en Nueva York, por el World Statesman Award (Premio Mundial de Estadistas), en su Cuarto Informe de Gobierno y en las felicitaciones de Año Nuevo, en enero de 1993. Se mencionó la zona como ejemplo tanto en México como en el extranjero. Hasta allí llegan, en diversas ocasiones, junto con el presidente, varios ministros y una multitud de observadores. Aparecen además los artículos de *México Desconocido* y del *Wall Street Journal*.⁵ ¿De qué se trataba realmente? ¿De una cruzada ecológica, de un engaño o de una dinámica verdadera y positiva? ¿Podemos extraer, a partir de esta experiencia —el control de

* CEMCA.
dauzier@internet.com.mx

un frente de colonización en el sur de Campeche y la creación de la Reserva de Calakmul—, algunas lecciones sobre el tipo de relaciones que deberían producirse entre los diversos actores del mundo rural? ¿Es posible, por otra parte, organizar la conjunción entre campesinos, ecología e instituciones? Si se respondiese a estas preguntas, dispondríamos de una perspectiva a partir de la cual sería posible el análisis de los numerosos planes implantados en el Sureste y también el de ese punto candente de la frontera sur: Chiapas, en donde 25 años de lucha “conservacionista” sólo lograron una evidente destrucción la cual, a su vez, provocó la agudización de los problemas sociales al punto de ocasionar la explosión del primero de enero de 1994.⁶

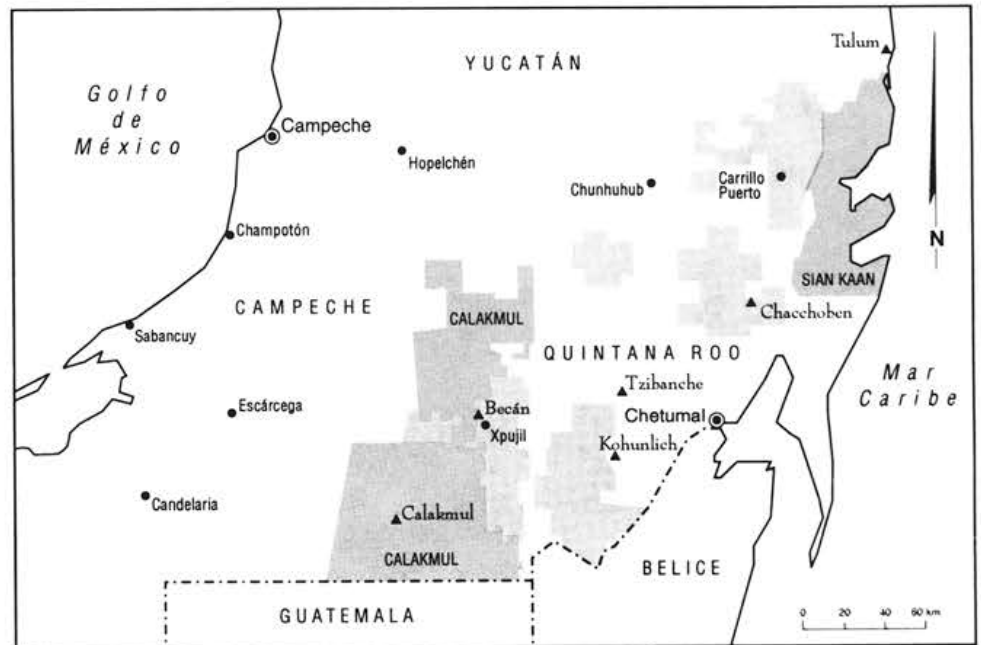
Las trampas de la “colonización”

Por largo tiempo, Campeche ha sido considerado —salvo su costa— como un territorio casi vacío; cierto es que ese estado, según cifras del censo de 1990, apenas lo poblaban unos 600 000 habitantes. A partir de 1960, se convirtió en un Estado receptor de población. La Reforma Agraria propició una migración dirigida hacia las tierras nacionales o hacia las enormes “ampliaciones” de los ejidos forestales; aunque dirigida, no contó con verdaderos apoyos, por lo que ahí se precipitó también una colonización espontánea. La pobreza del suelo no tiene parangón sino con la de las heterogéneas poblaciones que llegaron a los bosques secos, carentes de ríos y tan sólo con 800 mm de precipitación media anual, y que de ningún modo estaban preparados para recibirlos.⁷

La parte sur de los antiguos municipios de Champotón y Hopelchén —desde la frontera con Guatemala hasta el norte de la carretera Chetumal - Escárcega (véase mapa)— se extiende sobre aproximadamente un millón de hectáreas, pobladas a principios de los años 90 por 3 000 familias, un poco menos de 13 000 habitantes: un mosaico étnico, lingüísti-

co, cultural, una mezcla de experiencias —y de fracasos— diversos. Un campesino sin duda pobre pero anclado a su terruño, todavía es una imagen demasiado idílica para esas familias de colonos que han venido sufriendo traslados por todo el sureste desde hace unos 30 años. Expulsados por los ganaderos, las presas, los volcanes o el hambre cotidiana hasta las tierras de los confines —la Selva Lacandona o Quintana Roo—, estos perpetuos desarraigados a menudo son arrojados de un primero a un segundo frente de colonización, de Michoacán a Chiapas, de Chiapas a Campeche; en consecuencia, se genera un desinterés de las autoridades locales, en parte explicable. ¿Para qué invertir en pozos, en caminos, en escuelas para poblados con un centenar de habitantes atrapados en el flujo migratorio y que van a acabar en los cinturones de miseria de Cancún? A fines de la década de 1980, de la carretera que comunica a Chetumal con Escárcega, que atraviesa la zona de inmigración reciente, sólo se desprendían caminos en muy mal estado; desde luego ahí no se contaba con electricidad, menos aún con agua potable o con una clínica rural...

Los inmigrantes provenían de 23 estados de la República (algunos tan lejanos como Sinaloa). Al



Ejidos forestales
 Reservas de la biosfera
 Sitios arqueológicos

Mapa - Áreas de los Proyectos de Ecología Productiva en el sur de Campeche y Quintana Roo.

inicio se instalaron en la región del río Candelaria y del valle de Edzná, y luego más al sur, en los dos municipios mencionados, pero a varias horas —en temporada de secas— de las antiguas cabeceras municipales.⁸ La zona contaba con 62 ejidos. De ellos, los más antiguos y menos numerosos se habían fundado hacía 40 años o más, y los más recientes, hacía seis o siete. De los 13 000 campesinos, menos de la mitad eran originarios del Estado. Aun cuando unos pocos pertenecían a la cultura maya-yucateca —nacidos en Yucatán, llegaron a la selva campechana para extraer la goma del chicozapote—, la gran mayoría procedía, en primer lugar, de Chiapas, luego de Tabasco y de Veracruz: indios choles o tzeltales, mestizos de Zacatecas o Michoacán. En todo el municipio de Hopolchén, la mitad de la población con más de cinco años hablaba una lengua indígena —alguna de las 20 registradas en la zona—; pese a ello, sólo 1 500 —en su mayoría mujeres inmigrantes de Chiapas— eran monolingües de una lengua indígena. La población era aún más heterogénea con la creciente presencia de las iglesias protestantes, que ya contaba con un 20% de fieles.

Con el objeto de evitar probables conflictos sociales en otros lugares, se les permitió llegar, o se les envió, a una zona inhóspita cuyo único valor consistía en estar vacía. El estancamiento económico fue generado por el debilitamiento de varios factores: debilitamiento del chicle y debilitamiento de la actividad forestal porque las empresas⁹ —que contaban con concesiones desde los años cuarenta— tras acabar en los últimos 25 años con todas las maderas preciosas (caoba, cedro), estaban por cerrar.

Todo parecía contribuir a la marginación de estos grupos que por cierto tenían 40% de niños y jóvenes con menos de 15 años. Su único punto común era la costumbre de subsistir con la siembra del maíz y del chile, y su ignorancia radical —casi de todos ellos— del ambiente de la selva. Pronto comenzaron a desmontar, cada año, 2 ó 3 ha de las 10 ó 20 otorgadas a cada familia, ya fuese para el maíz, o para la ganadería extensiva que seguía siendo el sueño de los inmigrantes de Tabasco y Veracruz, y que es un tipo de explotación aún más destructor de los bosques tropicales.



Ecología y agitación política

Los primeros grupos tuvieron que arreglárselas solos si querían mejorar sus condiciones de vida. Un dirigente muy combativo, E. Ek, ejidatario, maya y de familia de chicleros, había intentado, desde 1979, reagrupar fuerzas para evitar que la empresa forestal ubicada en Zoh-Laguna arrasara los bosques, lo que, junto con la caza clandestina —con fines comerciales— de jaguares, ocelotes y monos, contribuyó a la desaparición de armadillos, tepetzcuintles y venados, aportaciones alimentarias esenciales. En 1980, con el apoyo técnico de un ingeniero de Chapingo, los ejidos forestales crearon una unión de ejidos llamada Pueblo Maya de Campeche. “En este momento empezamos a sentir presiones y hostigamientos y nos acusaron hasta de subversivos para sacarnos del estado de Campeche.”¹⁰ En fin, la unión acabó por desaparecer en 1985, por un conjunto de factores: las presiones de los empresarios madereros y las de los políticos asociados a ese jugoso comercio, por las divisiones internas y por la partida del consejero técnico. No obstante, el dirigente continuó gozando de un auténtico prestigio en toda la región y fue sucesivamente teniendo cargos de mayor responsabilidad política.

Los nuevos asentamientos provocaron un uso extensivo y anárquico del espacio: las selvas son reemplazadas rápidamente por paisajes pedregosos de acahuales o milpas ralas. Predomina una impresión de caos espacial y de gran dispersión de los actores sociales, así como la desalentadora conciencia, incluso para los mejor intencionados —agrónomos o funcionarios—, de estar llenando un barril sin fondo. De ahí el surgimiento de conflictos, a veces violentos, con las autoridades a fines de los setenta y después en ocasión de las elecciones de 1988. A los problemas socioeconómicos que derivaban en agitación política, se superpone el debate ecológico. Ahora bien, esta zona era más sensible de lo que pudiera preverse pues no hay que olvidar la frontera: frontera política por la que pasan los refugiados centroamericanos ni la frontera económica con el tráfico de maderas taladas clandestinamente en Guatemala. ¿Podía el gobierno seguirse contentado con las respuestas tradicionales que siempre caen en el corto plazo, como “... satisfacer necesidades superficialmente, lo más rápido posible, y luego abandonar el terreno”? A principios de 1989 podía pensarse resolver el problema ecológico decretando una reserva para calmar a los ecologistas, al menos en el papel. De lejos, este último punto parecía el más fácil: una firma. Por ahí se empezó.

Entonces, en el mes de mayo de 1989, los bosques de Calakmul se convirtieron en una Reserva de la Biosfera, es decir, se pusieron 723 000 ha bajo protección, de las cuales 474 000 eran “zonas de amortiguamiento”. Por su superficie (12% del estado de Campeche), se convirtió en la primera reserva forestal nacional, dos veces mayor que la Reserva de Montes Azules en Chiapas. Pero cuatro ejidos quedaron totalmente dentro del área central (“área núcleo”) y 20 en la zona de amortiguamiento, así como numerosos poblados un tanto dispersos. En su totalidad o en parte, 37 ejidos y 3 700 habitantes resultaron afectados. De ello se acuerdan muy bien los campesinos: “Nos agarra de sorpresa este Decreto porque a nosotros, no puede ser posible que una institución como la Reforma Agraria no podía estar enterada de lo que estaba pasando y que nosotros estábamos adentro”.¹¹ ¿No era posible? En la Selva Lacandona los decretos se habían establecido de la misma manera...¹²

Como todas las reservas de la biosfera que se han creado, ésta debía ser administrada a nivel federal (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE, rebautizada en 1992 Secretaría de Desarrollo So-

cial, Sedesol); también atraía a buen número de instituciones extranjeras y de investigadores; sin embargo había un abismo entre ellos y la cotidianidad de las poblaciones campesinas, atrapadas en una política ecológica que protegía a la naturaleza a expensas de los hombres. Todo ello con la total indiferencia de las instituciones: las primeras visitas de concertación de la SEDUE no comenzaron sino hasta 1991; y el primer consejo de representantes de las poblaciones vecinas —definido por la SEDUE en septiembre de 1989— nunca llegó a funcionar. Los conflictos se agudizaron, y durante la campaña de 1991 para elegir al gobernador de Campeche hubo riesgos de violencia.

Los inicios de Solidaridad

Por esas fechas lo que se tenía era una región de gran pobreza, bajo la tutela de un Centro Coordinador Indigenista relativamente dinámico,¹³ con algunos vestigios de organización y dirigentes capaces de reactivarla, todo ello en un contexto político incierto para el gobierno. Se trataba de un panorama clásico de los inicios de Pronasol. En 1990, las nuevas Brigadas de Solidaridad¹⁴ dirigidas por el Instituto Nacional Indigenista, INI, luego de algunos meses de diagnóstico comunitario, establecieron un Fondo Regional de Solidaridad; este programa se centraba en la producción de chile —el “plan picante”—; en el caso de la Reserva, poco faltaba para que la medida fuera paradójica, ya que el chile es un cultivo que agota con mucha rapidez las tierras recientemente desmontadas y que exige incesantemente nuevos desmontes. Lo que era más grave, los brigadistas y los ejidatarios entraron en conflicto. Los discursos “de buena fe” en cuanto al liderazgo natural en el ejido eran seguidos en la práctica con dificultad por los jóvenes técnicos, que tenían gran entusiasmo pero también mucha prisa. “No ha sido una tarea fácil, porque ciertos organizadores llegan a nuestra región y no tienen ideas acordes a las nuestras de transformar esta región, y esto se torna en lucha diaria. Recuerdo muy bien, una vez, que ciertos organizadores nos calificaron de ‘cinco monos ignorantes’.”¹⁵

Sin entrar en el debate sobre las políticas de acomodo al neoliberalismo¹⁶ ni en los juegos políticos del salinismo, hay que reconocer que este tipo de programa populista en gran medida depende mucho

de hasta dónde son capaces de involucrarse los promotores. En medio de este conflicto entra en escena, en 1990, el Programa Nacional de Reforestación de Solidaridad. Éste, en efecto, estaba coordinado a nivel nacional por un pequeño equipo de funcionarios que conocían bien la región porque trabajaban en el marco del Plan Piloto Forestal de Quintana Roo¹⁷ desde hacía varios años. Pensaban igual que quien habría de convertirse en director de la Reserva, que decía: "... durante 35 años trabajando en selvas de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, me he topado con que el manejo de las selvas no es un problema científico o técnico, sino que es un problema social bastante grave, un problema que a veces hemos atrasado porque no hay una apertura para los propios ejidatarios ni el apoyo necesario".¹⁸

Tras haber comenzado por crear un vivero en Zoh-Laguna (véanse fotos de la autora), en el ejido Álvaro Obregón —el más organizado por el dirigente antes mencionado, E. Ek—, el nuevo equipo formado con los tres técnicos del Plan Piloto Forestal muy pronto se dio cuenta de que se podían lanzar los programas propiamente forestales para que los campesinos se organizaran y, por tanto, aprovechar las instancias ya existentes, como las "brigadas del INI", del Fondo Regional de Solidaridad que funcionaban en una veintena de ejidos. Su objetivo era provocar el interés de los seis ejidos propiamente forestales por un nuevo tipo de explotación menos depredadora del espacio; esos ejidos tenían todavía

varios miles de hectáreas boscosas, aunque la caoba ya había desaparecido. Pero, como las zonas de bosque estaban lejanas unas de otras, era necesario ir más allá de la visión puramente forestal y proponer programas que pudieran interesar a otros ejidos, como la agrosilvicultura o la obtención de agua potable.

Cuando los programas funcionasen, las brigadas deberían irse, pero se mantendría el Fondo Regional de Solidaridad, dirigido por un Consejo de Campesinos. La organización se propone, desde el principio, la autogestión a partir de las asambleas ejidales que agrupaban a 3 000 ejidatarios de toda la zona. Según el perfil de organización de los Fondos Regionales, cada ejido enviaba dos representantes: el comisariado ejidal y un delegado (tres o cuatro mujeres tuvieron esos puestos). La asamblea de representantes contaba, en 1994, con 90 personas; se reunía una vez al mes en un ejido diferente y eligió un Consejo Directivo con un presidente —en funciones por dos años y no reelegible—, un presidente de vigilancia, un tesorero, un secretario y, después también una representante de las mujeres. El primer presidente era el dirigente del ejido forestal Álvaro Obregón, E. Ek. El Consejo recibió gran ayuda del asesor general, después primer director de la Reserva que —tanto en cuanto a las metas como en los contactos exteriores y durante las asambleas mensuales— desempeñaba un papel fundamental, y de unos 15 consejeros técnicos que el Consejo mismo

reclutaba en forma progresiva. Cada proyecto funcionaba con un representante campesino —a la cabeza— y un técnico, encargado de asegurar la formación de promotores destinados a sustituirlo y a convencer a los otros ejidatarios de las bondades de los programas.

Los 18 técnicos, animados por el entonces director de la Reserva que vivía en Zoh-Laguna (y cuyo carisma personal claramente le ayudaba a catalizar las energías), debían canalizar los apoyos sin caer en excesos de autoridad o de responsabilidad política, y tratar de hacer olvidar algunas desventuradas experiencias con los brigadistas.

Paralelamente, en 1991, el grupo de asesores decidió contac-



Vivero de Zoh-Laguna.

tar al candidato del PRI a la gubernatura, un ingeniero agrónomo ex delegado de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, SARH, en Campeche y trasladado después a Chiapas, como delegado de Sedesol y Solidaridad. Tenía la reputación de no estar ligado con los intereses madereros tradicionales... al contrario de muchos de sus predecesores. Este contacto permitió que el dirigente de Zoh-Laguna, en otros tiempos opositor del PRI, fuera llamado al equipo de campaña para manejar los asuntos forestales. Los bien conocidos riesgos de "caciquización" parecían equilibrarse por la existencia del Consejo Regional de Ejidos y por el compromiso explícitamente no partidista del equipo técnico.

Del clientelismo a la formación de interlocutores

Al aprovechar la política nacional de Solidaridad, que junto con un cierto tipo de clientelismo trataba de fomentar la autonomía, la transferencia de fondos rápida y sin intermediarios, el Consejo manejó proyectos, fondos y hombres. Dispuso de un potencial de movilización y de acción, en una red que se fue ampliando gracias a las luchas cotidianas. Las ayudas gubernamentales a este reconocido socio¹⁹ provenían principalmente de Solidaridad aunque intervenían también diversas instituciones federales con la participación del Estado de Campeche. A las subvenciones del Fondo Regional de Solidaridad llegadas por el conducto del INI se sumaban los programas forestales y ecológicos de Solidaridad; además, al proyecto global de Ecología Productiva —implantado en la zona por Solidaridad, en 1992— se incorporó una importante participación tanto de la Secretaría de Turismo con actividades ligadas al ecoturismo, como del INAH; este tipo de tareas requieren mano de obra de los ejidos en las operaciones de restauración o de mantenimiento de los sitios arqueológicos.

Al Consejo correspondía evitar la dispersión, canalizar los fondos y administrarlos. Progresivamente, en particular bajo el impulso del equipo del Programa Nacional de Reforestación y contando con el vigoroso apoyo del gobernador Azar, las dependencias federales se fueron desentendiendo; entonces, la aprobación de programas y financiamientos fueron siendo tarea de las oficinas locales. Estos

fondos llegaban a casi un 70% del presupuesto global; contaban con —por orden de importancia— Solidaridad, INI y recursos propios de Campeche. El resto provino de participaciones exteriores a los programas gubernamentales, sobre todo de organizaciones no gubernamentales.

Estos organismos dan muestras de la importancia de Xpujil. ¿Qué es lo que aportan sus propuestas, en ocasiones desordenadas, a la tradicional oposición entre los campesinos y el Estado?²⁰ Las primeras ONG llegaron a los ejidos por la Reserva de Calakmul y por la cercanía del Petén guatemalteco. Pero, a veces, la multiplicación de buenas intenciones se acompaña de una especie de volatilidad de los proyectos y de los responsables, mientras que los intereses inmediatos divergen en rivalidades, con los conflictos de perspectivas, de ritmos y de autoridades que podían provenir tanto de las instituciones internacionales como del Banco Mundial o de pequeñas ONG.²¹

Todos estos organismos habían sentido atracción, en esos años de preparación de la Conferencia de Río, por el espacio de la Reserva y, en muchos casos, se contentaban con los trabajos de investigación, de programación ecológica o de ciertos proyectos de agricultura orgánica, más o menos idealistas. En realidad, se trataba de no muchos campesinos y de aún menos organizaciones campesinas. Lo que tenía mayor peso para estas ONG era que había relación con interlocutores oficiales. Sin embargo, en el campo, los representantes oficiales de la Reserva y los planes de ejecución —que venían de la Ciudad de México— eran casi inexistentes.²² Además en esas condiciones el diálogo no podía darse con los campesinos.

Pronatura Península de Yucatán, la primera ONG mexicana que ahí se presentó y que había reunido bajo su égida a Vecinos Mundiales,²³ Nature Conservancy, Ford Foundation, Global Climate Change Program, USAID, US Forestry Service, llegó en 1989 para hacer investigaciones sobre la fauna y la flora de Calakmul. Ahora bien, uno de los logros del Consejo fue que Pronatura y todos sus apoyos hayan aceptado depender progresivamente, en cuanto a su propia planificación, de los proyectos diseñados por los consejeros técnicos del Consejo y aceptados por la asamblea. Luego, algunos de los apoyos internacionales, seducidos por el trabajo de los ejidatarios, se convirtieron en interlocutores directos: tal es el caso de fundaciones como la MacArthur Foundation para contribuir a los estudios sobre la fauna, y World Wildlife Fund que, tras donar vehículo y